



INFORME DE COYUNTURA POLÍTICA

WWW.LYD.ORG

ISSN 2735-7589

N° 49
JULIO 2026

Contenido

TEMA DEL MES: ANÁLISIS DEL MOMENTO POLÍTICO EN TORNO A LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL	3
CHILE BAJO LA LUPA: EL GIRO ECONÓMICO EN LA AGENDA CIUDADANA	5
ALERTA CONCEPTUAL: POLARIZACIÓN POLÍTICA	7

Informe preparado por el Programa Política y Sociedad Civil, Libertad y Desarrollo.
Responsable: Rodrigo Ubilla rubilla@lyd.org

TEMA DEL MES

ANÁLISIS DEL MOMENTO POLÍTICO EN TORNO AL PROYECTO DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

La tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional en el Senado se configuró como un hito político de alta relevancia para el inicio del ciclo gubernamental, tanto por el contenido económico de la iniciativa, como por la forma en que ordenó las posiciones de los partidos. En este marco, la discusión parlamentaria operó simultáneamente como una prueba de capacidad legislativa del Ejecutivo, como un mecanismo de diferenciación estratégica para las fuerzas oficialistas y un espacio de reacomodo para las oposiciones.

Desde la perspectiva del Gobierno, la prioridad estuvo centrada en asegurar una aprobación dentro de los plazos definidos por el Ministerio de Hacienda, consolidando una señal de gobernabilidad y control de agenda. La actuación del Ejecutivo combinó urgencia legislativa, disciplina comunicacional y búsqueda de apoyos más allá del núcleo oficialista, con el objetivo de proyectar que la reconstrucción económica constituye el primer componente operativo de su programa. La aprobación en primer y segundo trámite legislativo permitió al Gobierno presentar un resultado institucional concreto, asociado a crecimiento, empleo e inversión, pero también evidenció que la posibilidad de sacar adelante futuras reformas dependerá de la capacidad de articular mayorías variables.

El oficialismo actuó con un nivel relevante de cohesión parlamentaria. El voto ordenado de sus senadores permitió despejar el segundo trámite constitucional y reforzar la imagen de una coalición capaz de respaldar iniciativas centrales del Gobierno. Sin embargo, esa cohesión no elimina la necesidad de administrar tensiones internas fundadas principalmente en materias políticas y también legislativas. La incorporación o aceptación de modificaciones durante el trámite permitió reducir resistencias, pero también dejó en evidencia que el oficialismo deberá sostener una narrativa que vincule los beneficios macroeconómicos de la reforma con efectos verificables en hogares, empleo y actividad productiva.

En el campo opositor, el debate mostró una fragmentación significativa. Sectores del socialismo democrático, particularmente dentro del PS y el PPD, enfrentaron tensiones entre una estrategia de oposición frontal y otra orientada a condicionar apoyos mediante indicaciones o ajustes sustantivos. Esta divergencia no solo reflejó diferencias programáticas, sino también distintas evaluaciones sobre el costo de bloquear una iniciativa presentada bajo el marco de reconstrucción y reactivación económica, tensionando incluso las propias estructuras partidistas. La Democracia Cristiana apareció más próxima a una posición de rechazo articulada con los sectores más ortodoxos de la izquierda, mientras que el Partido Comunista mantuvo una postura irreductible, con énfasis en la motivación por favorecer a los grupos empresariales y afectar negativamente a los trabajadores.

El Frente Amplio adoptó una posición menos beligerante que la del Partido Comunista, aunque mantuvo diferencias de fondo mediante indicaciones y énfasis programáticos propios, coincidiendo con el Partido Comunista en la inconstitucionalidad de algunas de las normas aprobadas. En paralelo, el Partido de la Gente y otros actores no alineados adquirieron importancia táctica en la Cámara de Diputados, en la medida en que sus votos contribuyeron a ampliar el margen de aprobación y a demostrar que el Ejecutivo podía construir respaldos fuera de su coalición original. Esta dinámica confirma la existencia de un Congreso donde las mayorías no están completamente predeterminadas y donde la negociación artículo por artículo puede resultar decisiva.

El resultado legislativo, por tanto, constituye un avance significativo para el Gobierno, pero no resuelve por sí mismo los problemas de la agenda económica. Las mediciones de opinión pública muestran un escenario de apoyo dividido hacia la reforma y una evaluación ciudadana condicionada por expectativas económicas. La aprobación presidencial registra variaciones positivas en las encuestas recientes, pero la desaprobación continúa en niveles elevados y la percepción sobre los efectos del proyecto permanece polarizada. En particular, los datos disponibles indican que una proporción relevante de la ciudadanía anticipa que la situación económica del país o de los hogares podría mantenerse igual o empeorar, lo que limita la capacidad del Gobierno de transformar un triunfo parlamentario en respaldo social estable.

El principal desafío gubernamental consiste en convertir los componentes económicos de la Ley de Reconstrucción en resultados observables para la ciudadanía. La confianza de los sectores vulnerables, que aparece asociada a expectativas de mejora material más que a una adhesión ideológica completa al proyecto gubernamental, dependerá de la rapidez con que se perciban efectos en empleo, ingresos, inversión local, reconstrucción producto de las emergencias y capacidad de respuesta estatal. En este punto, la política económica debe ser acompañada por mecanismos de implementación claros, metas públicas, seguimiento de resultados y una comunicación que distinga entre beneficios macroeconómicos esperados y efectos concretos en la vida cotidiana.

Un segundo desafío es preservar la gobernabilidad en el Congreso, para ello el Gobierno deberá anticipar objeciones constitucionales, evaluar el impacto político de las medidas propuestas, incorporar evidencia fiscal y sectorial, y sostener canales de diálogo con bancadas que no forman parte del oficialismo, pero que pueden respaldar aspectos específicos de la agenda gubernamental.

En síntesis, el momento político posterior al despacho del proyecto desde el Senado combina un logro legislativo relevante para el Gobierno con un escenario de adhesión ciudadana todavía incierto. El Ejecutivo logró ordenar a su coalición, atraer apoyos complementarios y avanzar en una iniciativa emblemática; el oficialismo exhibió disciplina, aunque deberá sostener coherencia entre agenda económica y sensibilidad de sus distintos partidos, y la oposición mostró divisiones estratégicas que pueden influir negativamente en sus intenciones de incidir en el congreso. La recuperación de confianzas ciudadanas dependerá menos de la aprobación formal de la ley que de su capacidad de producir efectos económicos percibidos como oportunos y verificables por los grupos que otorgaron respaldo inicial a la administración.

CHILE BAJO LA LUPA

EL GIRO ECONÓMICO EN LA AGENDA CIUDADANA

Lo económico escala en la agenda ciudadana

Las encuestas de las últimas semanas muestran que la preocupación económica se acerca a la seguridad como principal demanda ciudadana. Según Critería del 5 de julio, la seguridad sigue liderando con 31%, pero las categorías económicas —más empleos y mejores sueldos, y reactivación— suman 29%, siete puntos más que en marzo. Esta convergencia indica que la agenda ciudadana empieza a alinearse con la agenda económica. Aunque la seguridad mantendrá su relevancia, la urgencia económica crece con fuerza y podría liderar próximas mediciones.

Lo anterior se ve confirmado cuando se analizan los indicadores de percepción económica de julio, que configuran un escenario de deterioro pronunciado en cómo la ciudadanía percibe su propia situación. En la encuesta Cadem, la evaluación negativa de la situación económica personal y familiar alcanza 56%, el nivel más alto desde marzo de 2014. Las expectativas de que se dificulte el consumo de bienes y servicios suben a 79%, el peor registro desde junio de 2014, mientras que la percepción negativa sobre la situación actual del empleo llega a 88%, el registro más alto desde abril de 2021, cuando el país aún procesaba los efectos de la pandemia.

Según la encuesta Critería antes citada, un 40% de los encuestados atribuye la situación económica actual principalmente a los problemas heredados del Gobierno anterior, un 30% a las decisiones del Gobierno actual y un 24% a una combinación de factores. Si bien la mayor parte de la responsabilidad percibida recae sobre la administración anterior, el 30% que señala al Gobierno de Kast constituye una señal temprana.

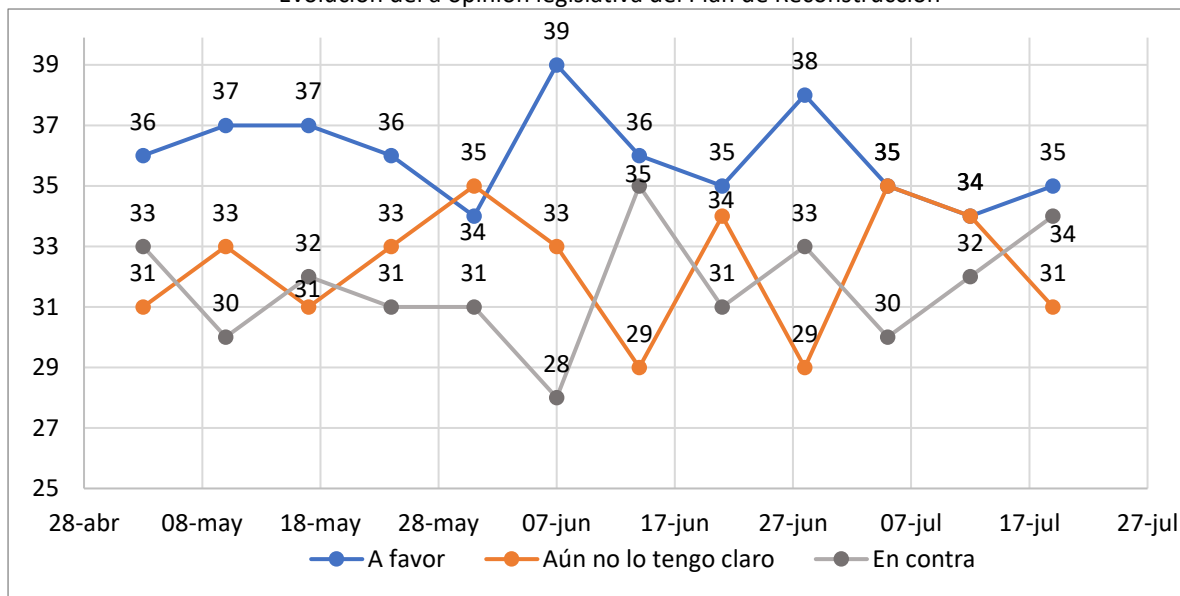
En conjunto, estas cifras configuran un riesgo relevante para el Gobierno. Aunque el deterioro económico se ha gestado y acumulado durante los últimos años, desde la perspectiva del público, una parte de esa responsabilidad recae sobre las autoridades actuales.

Nivel de aprobación legislativa

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto de reconstrucción llega a su tercer trámite en la Cámara de Diputados con una opinión pública dividida. Según Cadem del 17 de julio, un 43% cree que debería aprobarse definitivamente y un 46% estima que debiera rechazarse. Aunque la aprobación lideró en abril y el 10 de julio, el rechazo se ha impuesto en tres de seis mediciones, reflejando una ciudadanía aún sin una posición consolidada.

Critería muestra una trayectoria más favorable, pero con un margen cada vez más estrecho: en sus trece mediciones desde mayo, el apoyo al proyecto siempre superó al rechazo, aunque al 19 de julio la diferencia cayó a solo un punto, con 35% a favor y 34% en contra (Gráfico 1).

Gráfico 1
Evolución de la opinión legislativa del Plan de Reconstrucción



Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta Critería 19 de Julio 2026.

La convergencia de ambas series indica que el plan conserva un piso de apoyo, pero con un margen cada vez más estrecho. Esta reducción refleja un debate legislativo y público equilibrado, donde los argumentos a favor y en contra han tenido una visibilidad similar y han ido penetrando fuertemente en la opinión pública. En este contexto, la capacidad del Gobierno para inclinar la opinión dependerá menos del debate y más de los resultados concretos que logre vincular al plan.

La encuesta CEP aporta elementos adicionales para el análisis

Según Critería del 19 de julio, la percepción sobre el impacto esperado del proyecto se ha mantenido levemente favorable, aunque con una brecha cada vez más estrecha. Entre mayo y julio, la evaluación positiva nunca fue superada por la negativa, pero pasó de una ventaja máxima de 16 puntos el 7 de junio a solo un punto el 19 de julio, con 36% de opiniones positivas y 35% negativas. Esta convergencia refleja un apoyo aún existente, pero crecientemente frágil.

Ese estrechamiento se inscribe en un fenómeno más amplio identificado por estudio del CEP¹ a partir de la Encuesta CEP N°96. Las variables como la confianza ciudadana en las instituciones y la aprobación del Gobierno dependen fundamentalmente de factores económicos de corto plazo. En este escenario, el deterioro de las expectativas de consumo, empleo y situación personal registrado por Cadem puede afectar no solo la evaluación del Ejecutivo, sino también la confianza en las instituciones públicas. Aquí está el marco de las encrucijadas que el Gobierno, y en especial el equipo económico, deberá enfrentar en los próximos meses.

¹ España, A., Izquierdo, S. y Mascareño, A. (2026). Fragilidad institucional y expectativas ciudadanas al inicio del Gobierno de J. A. Kast. Un análisis en base a la Encuesta CEP N°96. Puntos de Referencia N°779, Centro de Estudios Públicos.

ALERTA CONCEPTUAL POLARIZACIÓN POLÍTICA

La polarización política ha ido configurándose en Chile a lo largo de un ciclo marcado por oscilaciones cada vez más intensas. A partir de la presidencia de Bachelet en 2006, cada traspaso posterior ha significado una alternancia entre sectores opuestos, como un "péndulo político". Sin embargo, lo que distingue al período reciente no es la alternancia en sí, sino la progresiva dificultad para construir acuerdos que trasciendan la frontera entre ambos bloques. Tras el estallido de 2019, este péndulo parece haberse acelerado. Un plebiscito constitucional con un 78% de apoyo al cambio derivó en una Convención Constituyente de marcada orientación de izquierda, cuya propuesta fue rechazada. El segundo intento, con un Consejo Constitucional de mayoría de derecha, corrió la misma suerte. En ambos casos, el sector que controló el proceso no logró producir un texto que resultara aceptable para la mayoría de los ciudadanos.

La elección presidencial de 2025 entre Jeannette Jara y José Antonio Kast expresó nuevamente esta dinámica, pero con particular intensidad. Según la Encuesta LEAS UAI-CNEP², el índice de polarización afectiva³ alcanzó 6,7 puntos en una escala de 0 a 10, el registro más alto desde que la serie se aplica en Chile: 3,6 en 1993, 4,5 en 2017 (Piñera-Guillier) y 3,9 en 2021 (Boric-Kast). En apenas cuatro años, la polarización afectiva creció más de un 70%. El hallazgo tiene además dimensión internacional. Entre las elecciones medidas por la red CNEP desde 2020, la chilena registra el segundo mayor nivel de polarización afectiva, superada solo por Estados Unidos en 2024 (Trump-Harris, 7,14) y por delante de Argentina 2023 (6,63) y Brasil 2020 (6,32).

Para comprender la naturaleza de este fenómeno, resulta útil la distinción que ofrece la literatura académica entre dos dimensiones de la polarización. La primera es la polarización ideológica, que refiere al distanciamiento progresivo en las preferencias de política pública entre los partidarios de cada sector, donde los adherentes de cada bloque adoptan posiciones cada vez más alejadas entre sí sobre el rol del Estado, las políticas sociales o el modelo económico (Webster y Abramowitz, 2017). La segunda es la polarización afectiva, que captura la antipatía, desconfianza y distancia social que los partidarios de un sector sienten hacia quienes se identifican con el bando contrario (Iyengar, Sood y Lelkes, 2012). Lo distintivo de esta segunda forma es que el rechazo no requiere un desacuerdo sustantivo sobre políticas concretas, sino que puede activarse por el solo hecho de percibir al otro como parte del grupo opuesto.

Dichos autores fundamentan esto en la teoría de identidad social de Tajfel (1970). Se trata de una aproximación desde la psicología social, según la cual la identidad social es aquella parte del autoconcepto que proviene de la pertenencia a grupos sociales, junto con el significado emocional y el valor que se le otorga a dicha pertenencia. Bajo esta lógica, la sola identificación con un grupo basta para generar sentimientos negativos hacia quienes son percibidos como parte del grupo rival, sin que medie necesariamente un desacuerdo sobre políticas concretas. En la elección de 2025, esta dimensión afectiva se manifestó en una parte de quienes votaban por Jara argumentando que lo

² LEAS UAI-CNEP (2025). Encuesta de Opinión Pública: *Comparative National Elections Project*. Laboratorio de Encuestas y Análisis Social, Universidad Adolfo Ibáñez.

³ El índice de polarización afectiva del LEAS UAI mide las respuestas emocionales que generan los candidatos enfrentados, hace esta medición en tres olas, antes durante y después de las elecciones. Mide la respuesta emocional en una escala de 0 a 10, utiliza los instrumentos estandarizados del *Comparative National Elections Project* (CNEP), red internacional activa en más de 30 países desde 1990. En Chile se ha aplicado en 1993, 1999, 2017, 2021 y 2025.

hacían para rechazar el fascismo, mientras que parte de quienes votaban por Kast aseguraban que nunca entregarían su voto al comunismo.

La polarización, sin embargo, no solo se profundiza desde la base electoral. Palonen (2009) propone entenderla también como un mecanismo que las élites políticas articulan para demarcar fronteras entre un "nosotros" y un "ellos", constituyendo dos campos que se sostienen más por su oposición mutua que por un contenido programático estable.

Este fenómeno, tanto en su dimensión afectiva, como en la estratégica, se sostiene a través de diversos mecanismos. Uno de ellos es el alineamiento partidario, un proceso por el cual los simpatizantes de cada sector se vuelven internamente más homogéneos en sus posiciones ideológicas, consolidando la percepción de una frontera clara entre ambos bandos (Levendusky, 2009, citado en Iyengar, Sood y Lelkes, 2012). A nivel de las interacciones cotidianas, Baldassarri y Bearman (2007) muestran que las personas tienden a discutir temas políticos con interlocutores ideológicamente afines, generando entornos donde las posiciones propias se refuerzan y la percepción de división se amplifica. Además, el entorno digital ha potenciado estas tendencias, ya que los algoritmos de las plataformas tienden a exponer a cada usuario a contenido afín a sus posiciones previas, mientras quienes interactúan en esos espacios suelen compartir la misma orientación política, configurando lo que la literatura denomina cámaras de eco (Barberá, 2020; Conover et al., 2011).

La polarización que atraviesa la sociedad chilena responde, en definitiva, a un entramado de factores ideológicos, afectivos y estratégicos que configuran un escenario donde la convivencia democrática enfrenta desafíos significativos. El registro de 6,3 puntos en polarización afectiva no es solo un dato académico, sino la expresión medible de una fractura que ha marcado los últimos tres ciclos electorales y que condiciona la capacidad del sistema político para procesar reformas de largo plazo.